Globethics Repository



Venezuela [Venezuela]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Sonntag, Heinz R.
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-10 22:56:45
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219405

Nueva Sociedad Nro. 151 Septiembre-Octubre 1997, pp. 17-26

Venezuela.
El difícil curso de la transición

Heinz R. Sonntag

Heinz R. Sonntag: sociólogo y doctor en Ciencia Social, profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela e investigador del Centro de Estudios de Desarrollo - CENDES, UCV, Caracas.

Palabras clave: situación política, gobernabilidad, Rafael Caldera, Venezuela.

Como es sabido, al gobierno de Rafael Caldera le falta poco más de año y medio para concluir, razón suficiente para trazar algunas líneas de reflexión sobre lo hecho –y lo no hecho–, así como sobre probables imágenes de futuro. Caldera inició su periodo constitucional en febrero de 1994, después de una campaña electoral accidentada[1] y con resultados inusuales para el contexto venezolano: cuatro candidatos con una votación muy pareja (tres con algo más del 20 % cada uno y el ganador con el 31%); una protesta masiva expresada en los votos captados por un partido-movimiento hasta entonces relativamente pequeño e insignificante, la Causa R (CR); y una abstención que, sin recurrir a tecnicismos sobre el total de la población votante y la precisión del padrón electoral, no bajó del 40%, según cifras oficiales –cabe señalar que el voto en Venezuela es obligatorio. Tales resultados no alcanzaron para darle al presidente la mayoría parlamentaria: los dos partidos que más votos le proporcionaron (MAS y Convergencia) obtuvieron aproximadamente un tercio de las plazas del Senado y la Cámara de Diputados, situación que prefiguró posibles dificultades a la hora de legislar y gobernar.

La marcha de Caldera hacia su segunda presidencia comenzó con un notable discurso el 4 de febrero de 1992, fecha del primer intento de golpe de Estado de ese año. Sin excusar a los golpistas, mostró comprensión en torno a sus motivos: la degradación y deterioro de las condiciones materiales de vida de los venezolanos y de las inmateriales de su convivencia en sociedad y en

[1] Incluso, durante los últimos días del proceso electoral y según datos que todavía están clasificados, se produjo un intento de un golpe militar: el ministro de la Defensa de entonces, vicealmirante Radamés Muñoz León, en compañía de algunos de sus colaboradores militares y civiles, se trasladó en un avión privado a Washington e intentó obtener el visto bueno del Departamento de Estado y el de Defensa para deponer el gobierno de transición presidido por Ramón J. Velásquez, impedir las elecciones e instalar in régimen autoritario. Sólo la decidida acción de Velásquez y la sorprendente visita de Alexander Watson, para entonces subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, tres días antes de las elecciones, en evidente apoyo a la democracia venezolana –incluso más allá de lo que dijo en su rueda de prensa–, salvaron el régimen democrático.

democracia, como resultado de la aplicación de las políticas de ajuste desde comienzos de 1989 y de los desaciertos, corrupciones y errores de numerosos gobiernos desde 1958 en adelante. Este discurso decidió la diferencia de votos a favor de Caldera, marcó profundamente, durante el proceso electoral y algún tiempo después, las expectativas hacia su candidatura y posterior gobierno y constituyó probablemente para muchos el único motivo para seguir creyendo en la democracia.

Democracia frágil y necesitada

A lo largo de 1993, quizá más dramática aunque menos espectacularmente que en 1992 –con sus dos «pronunciamientos militares» bombardeos y combates aéreos incluidos–, la gran mayoría de los venezolanos percibía que la democracia tenía un futuro muy incierto, y no lo lamentaba mucho. Esa mayoría sentía que las instituciones tambaleaban, no creía en el Congreso, desconfiaba del Consejo Supremo Electoral (CSE), veía en los partidos políticos no actores fundamentales del sistema democrático sino aparatos ajenos a su condición ciudadana. Tenía alguna confianza en los medios de comunicación social, pese a que –o precisamente porque en sus páginas y emisiones editoriales y en sus secciones políticas informaban y publicaban artículos y noticias que contribuían al desprestigio generalizado. Las organizaciones corporativas y los partidos demostraban en sus prácticas cotidianas que no representaban a quienes pretendían representar, sus liderazgos se percibían como unas mafias o «castas» cuyo único objeto era autoperpetuarse para el mantenimiento de sus privilegios a través de la monopolización del poder político. Hasta el Estado, otrora percibido como gran benefactor por su función de distribuidor de la renta petrolera, estaba cuestionado, por su creciente y cada vez más palpable incapacidad de responder a las demandas de los ciudadanos y procesarlas (lo cual se evidenciaba emblemáticamente en el sistema judicial). Tales tendencias a la disolución del espacio político no encontraban contrapeso en el fortalecimiento de la sociedad civil; más bien al contrario, resurgida en los años 70 y parte de los 80, ésta había sucumbido ante los efectos disolventes de la globalización sobre los actores colectivos tradicionales y el galopante individualismo que subyacía –y subyace a las políticas de ajuste ejecutadas entre comienzos de 1989 y mediados de 1993. El resultado fue una apatía generalizada.

Una vez elegido Caldera, muy pocos venezolanos, incluso entre quienes no votaron por él, dudaban seriamente de que el primer objetivo del nuevo gobierno –de cualquier gobierno en tales circunstancias– debía ser el restablecimiento de la calma en el sistema político y de la estabilidad democrática. Esta necesidad fue percibida y desde luego compartida por Caldera.

No sin ironía, este objetivo se puso de manifiesto inicialmente en el área militar, siempre –pero particularmente en aquellos momentos– terreno movedizo de lo político: pocos días antes de asumir y obviamente de acuerdo con el presidente

interino Ramón J. Velásquez, Caldera dio de baja a todo el Estado Mayor Conjunto, ministro de la Defensa incluido y excepción hecha del comandante general de la Guardia Nacional, y designó uno nuevo, no sospechoso de inclinaciones golpistas; pocos meses después decretó una amnistía para los oficiales cabecillas de los intentos de golpe de 1992. Con estas iniciativas logró tranquilizar la institución militar, tanto en su cúpula como entre los oficiales de rango mediano y bajo, y sobre todo transmitir a los ciudadanos la sensación de que la «situación militar» estaba de nuevo bajo control, un hecho de fundamental importancia en nuestras repúblicas donde la percepción ciudadana de la ley ***del péndulo*** entre autoritarismo y democracia casi siempre favorece al primero.

La conformación del gabinete ministerial respetó las lealtades del presidente y se nutrió por ende de amigos personales y seguidores de vieja data, entre ellos algunos que habían combatido con él las políticas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989–1993)[2]. Además, Caldera nombró independientes con fama de tecnócratas, militantes del partido socialcristiano Copel, del MAS y de Convergencia, siendo la designación más criticada la de su hijo Andrés Caldera Pietri como ministro de la Secretaría de la Presidencia[3]. Las diferentes organizaciones políticas hicieron una discreta oposición, en el caso de Copei y AD suavizada porque el presidente no intentó quebrantar el «pacto institucional», según el cual desde hace varios periodos constitucionales ambos partidos se repartían las presidencias del Senado y de Diputados.

Comparados con los convulsionados años previos (1992 y 1993), los primeros 12 a 15 meses del periodo fueron tranquilos. Los rumores desestabilizadores fueron apagándose. Cesaron las protestas y la represión, antes hechos cotidianos. La oposición parlamentaria no fue intransigente, incluso hubo formas de cooperación en el trabajo legislativo. La oposición extra-parlamentaria se centró fundamentalmente en algunos medios de comunicación y no fue demasiado violenta. Los tejidos de la sociedad civil se establecieron de nuevo, más visiblemente en zonas del interior que en la región capital. La democracia devino menos frágil y obtuvo el oxígeno que necesitaba. Se estaba en los inicios de una fase de transición política, sin una clara idea ni un proyecto de la(s) posible(s) trayectoria(s) de la misma.

Claro está que por el restablecimiento de calma y estabilidad hubo que pagar un precio. Se trató de la reforma del Estado y de la Constitución. El perfil de la primera fue bajado considerablemente, sin que desapareciera por completo del

[2] Especial mención merece Ramón Escobar Salom, fiscal general en el periodo constitucional anterior y acusador pertinaz de Pérez, como ministro del Interior, y Miguel Angel Burelli Rivas, uno de los «notables» antiperecistas, como canciller.

[3] A diferencia de muchos analistas, dicho nombramiento no me pareció un disparate ni, a la postre, una equivocación. Todos los presidentes han designado como ministros de la secretaría a personas de su más absoluta confianza (y las han botado cuando la perdieron) y Andrés Caldera no hizo mal trabajo.

discurso del Estado[4]; la segunda desapareció paulatinamente del debate público. Esta situación ambigua respecto de las dos reformas se mantuvo, al menos hasta hoy, razón por la cual se produjo una «suma-cero» esto es: una coyuntura en la que nadie ganó ni perdió, y que implicaba por eso mismo un cierto inmovilismo político.

La calma y la estabilidad tampoco fueron perdiéndose al optar el gobierno, en junio de 1994, por el control de cambios, la administración de las divisas y el control de precios. Fueron medidas más bien aplaudidas por amplios sectores sociales. Durante su campaña, Caldera había reiterado que en lugar de aplicar las políticas de ajuste iba a proponer y promover nuevos rumbos para la economía, eventualmente incluida la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, Lo que anunció en junio de 1994 no fue otro modelo sino el retorno a viejos moldes del desarrollo, lo cual fue aceptado por muchos. Con ello, en lo ***político***, la democracia se fortaleció, aunque transitoriamente.

Esas políticas fracasaron, perjudicaron al gobierno; les permitieron a sus no pocos enemigos dentro de las elites denostarlo como «populista» y «neoconservador» a la vez. Cuando el fracaso se tornó crecientemente evidente, después del primer trimestre de 1995, afloraron una vez más los rumores, estos terribles símbolos colectivos de insoportable incertidumbre. También empezaron a multiplicarse las manifestaciones de descontento y protesta –aunque no tanto como en el periodo anterior–, entre otras razones por la incapacidad gubernamental de proyectar una visión del futuro. La agitación se mantuvo durante los 12 meses siguientes, con sus síntomas de protestas y sus síndromes de represiones, éstas últimas menos violentas que las habidas en periodos constitucionales anteriores[5].

Quizá la respuesta adecuada a la crisis política hubiera sido retomar la reforma del Estado, en la medida de lo posible con un proceso de transformación mayor que abarcase también lo cultural (educación y ciencia y tecnología) y diese a la sociedad y al gobierno una mayor agilidad de acción, al tiempo que un mayor dinamismo. Ello fue enfáticamente sugerido por intelectuales cercanos y ajenos al régimen. Pero lo que predominó fue el inmovilismo, dañino para el gobierno y peligroso para la democracia[6], aunque tal vez explicable por la necesidad del gobierno del apoyo de Acción Democrática a muchas de sus iniciativas legislativas y parlamentarias en general.

---

[4] Sintomático al respecto es el hecho de que, si bien el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) fue designado al momento de formarse el primer gabinete, los demás comisionados fueron nombrados tan sólo medio año después: en agosto de 1994.

[5] Aquí, Teodoro Petkoff tiene razón: en varias entrevistas señaló que el segundo gobierno de Caldera habla sido muy poco represivo, sin matar hasta marzo de 1997 ni un solo manifestante.

[6] Fue en esos momentos que surgieron las insinuaciones de la renuncia del Presidente o de la posibilidad de un juicio político contra él.

Sólo hacia inicios de 1996 empezó a animarse de nuevo la vida política, gracias al comienzo de la discusión acerca de las opciones frente a una economía estancada y en vías de perder sus oportunidades de una «mejor inserción en el sistema globalizado». El mensaje presidencial al Congreso del 12 de marzo de ese año anunciaba las bases de una ***Agenda Venezuela***, cuyos detalles Caldera reveló a mediados de abril, no sin ocultar que tomaba las medidas (idénticas a las del Consenso de Washington y concertadas con las instituciones comprometidas con el mismo) muy a su pesar, en vista de las coacciones generadas por la situación económica. El simultáneo cambio de gabinete, con la incorporación de Teodoro Petkoff en Planificación y Freddy Rojas Parra[7] en Industria y Comercio, destrancó el inmovilismo, lo cual se reflejaría al poco tiempo en una mejora de la situación política.

Una vez más, la democracia se había preservado. Y siguió así aun con el impacto negativo que las políticas de reajuste macroeconómico tuvieron sobre el bienestar de las grandes mayorías. El nivel de protestas no aumentó, salvo en algunos segmentos corporativos de los sectores medios (médicos, profesores universitarios, otros profesionales al servicio del Estado): exigían, como en los tiempos pasados del «gremialismo petrolero»[8], una compensación salarial (aparte de otros beneficios) iguala la tasa de inflación (más del 100%). Estas protestas, lejos de significar una reconstitución de las identidades de actores colectivos antaño importantes (como los sectores medios), mostraban a las claras su descomposición en cuanto tales, puesto que dejaban entrever que no había ningún proyecto ni interés más allá de los estrechos intereses particulares.

El anuncio de la Agenda Venezuela II, destinada a la reactivación del aparato productivo y una más intensiva política social, en los primeros meses de 1997, no tuvo el mismo impacto positivo sobre la democracia que el inicio de la primera parte del «paquete Caldera» (como lo designaron importantes críticos del gobierno). La razón estriba en que los efectos depresivos de la primera parte de las políticas de ajuste han afectado gravemente a los actores colectivos (salvo los ya señalados). En estos momentos, ningún grupo, sector o clase social es capaz de actuar articuladamente, la individualización se ha convertido en atomización, la mayoría de las organizaciones políticas y corporativas está en proceso de división[9]. Otra vez se levantan las voces que piden la destitución del

[7] Fue presidente de la más importante organización empresarial y es (¿?) hombre de confianza del sector privado.

[8] Igual que la obediencia anticipada es hacer lo que se presume vendrá como orden desde arriba, este consiste en que el Estado concede en prebendas lo que sospecha vendrá como demanda desde abajo sin que se haya formulado.

[9] De los partidos, la CR y el MAS están en abierta ruptura. Copei logra todavía una suerte de armonía artificial (últimamente quebrada por la lucha candidatural que, en realidad, es una batalla entre el pragmatismo a-ideológico de Luis Herrera Campíns y el neoliberalismo de Eduardo Fernández). El único partido que se mantiene monolítico e incluso con bríos de renovación programática es AD. Las organizaciones corporativas de capital y trabajo (Fedecámaras y CTV) logran aparentar la unidad gracias a las negociaciones de la Comisión Tripartita.

presidente, por ejemplo a través de elecciones anticipadas, lo cual crearía una crisis política de dimensiones incontrolables.

En este contexto, una vez más se impondría para el gobierno tomar la iniciativa de reformas profundas. Debería haber un esfuerzo importante para que el tiempo no se agote, para que una determinación importante del presidente, del gobierno en su conjunto y de quienes lo apoyan tenga eco, y no se derive nuevamente hacia el pantano del inmovilismo y su corolario: la ausencia de participación ciudadana y la apatía, en breve: para que se establezca la oportunidad de iniciar la construcción común del futuro. Porque la permanencia de este pantano señalaría que en la transición no se supo atacar la fragilidad de la democracia y comprender la necesidad de mantenerla siempre con vida, no en «terapia intensiva»[10].

La economía: las soluciones no son meramente técnicas

La situación económica general que Caldera heredó de Velásquez[11] no había cambiado mucho en comparación con los últimos tiempos de las políticas de ajuste (mayo de 1993, momento de la destitución de Carlos Andrés Pérez). Los años 1991 y 1992, este último pese a las ya acotadas turbulencias sociopolíticas, habían sido tiempos de relativa bonanza, con un crecimiento notable (más del 8% en 1991) y una inflación más o menos controlada; algunos incluso vieron indicios de que el proceso de la ***economía real*** (la de la producción de bienes y servicios para la población y los mercados externos) iba hacia la reactivación. Pocos prestaban atención a las voces de economistas y otros analistas, que subrayaban lo artificial del crecimiento por estar fundamentado casi exclusivamente en la especulación financiera[12]. En otras palabras, no faltaban las señales de ***menetekel*** en las paredes de una economía aparentemente en vías de recuperación.

En el periodo de transición de casi dos meses entre la victoria de Caldera y su asunción, se desató la más grave crisis financiera que haya conocido el país. A raíz de la quiebra entre fraudulenta y «técnica» de un importante banco, destacado por su agresiva estrategia de captación de depósitos, vino una serie de bancarrotas de instituciones financieras y compañías de seguros. Frente a la gravedad de la crisis, el Fondo de Garantía de Ahorros y de Depósitos Bancarios (Fogade) no pudo cumplir con su función de protección a los ahorristas y demás usuarios del sistema financiero (que sumaban millones), razón por la cual el gobierno recién instalado se encontró frente a un terrible dilema: dejar que éstos perdieran su dinero o intervenir con fondos públicos en los bancos y

[10] Como alguna vez dijera Manuel Caballero, del éxito de estos 15 meses venideros (y de lo que se está proponiendo) dependerá el sitio de Caldera en la historia.
[11] Es de hacer notar que el presidente de la transición, desde su acceso al cargo en junio de 1993 no había tomado mayores iniciativas en cuanto a las políticas económicas.
[12] Por ejemplo, para el año 1991, el crecimiento de! sector manufacturero interno fue de alrededor de 4%, pero él del sector financiero de 23%.

demás instituciones quebradas. Se optó por la segunda alternativa, obligando al Banco Central a poner a disposición de Fogade ingentes sumas de dinero. El Estado gastó un mínimo de 11.000 millones de dólares (probablemente más) y se hizo cargo o estatizó, con el correr del tiempo, alrededor del 40% del sistema financiero nacional, Ello en circunstancias en las que un grupo grueso de banqueros y ejecutivos resultó ser una banda de simples delincuentes: se calcula conservadoramente que un 60% de los subsidios fue trasladado a cuentas privadas en el exterior, y se sabe que unas 150 personas se fugaron a países con los cuales no existen tratados de extradición por delitos económicos. Dicho sea de paso, este proceso duró en total más de diez meses, desde la quiebra del primer banco hasta la fuga del hasta ahora último banquero.

La solución adoptada por el gobierno para enfrentarse a la situación fue criticada por numerosos analistas, por el costo que implicaba para la economía (que era político: la mayoría de los ahorristas eran electores), Sin entrar en un análisis detallado de ello y de las consecuencias de la debacle, es necesario llamar la atención sobre al menos dos aspectos. El primero se refiere al significado de semejante inyección de fondos públicos en la economía, en términos de la emisión de dinero inorgánico y de inflación, El segundo aspecto atañe a la forma en que toda la situación de emergencia financiera influyó sobre la política económica del gobierno.

Respecto de la primera cuestión, no cabe duda de que una buena parte de la inflación del año 1994, y probablemente también de 1995, fue causada por las subvenciones a los bancos y demás instituciones, entre otras razones porque significaban un enorme peso en el gasto público. También resulta claro que las medidas de Caldera en junio de 1994, referentes a control de cambio, administración de divisas y regulación de precios, tuvieron una de sus causas principales en esa crisis financiera, desde luego por la criminal transferencia de fondos destinados a la salvación de la banca hacia el exterior, esto es: un considerable aumento de la «fuga de divisas».

Sobre el segundo aspecto, quizá la concentración en la emergencia haya distraído la atención del gobierno respecto de lo que había sido la propuesta. inicial de Caldera: la búsqueda, el diseño y la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo, en lugar de seguir aplicando las políticas de ajuste o, como se hizo, volver a un modelo cuyo agotamiento era a todas luces obvio. En efecto, los esbozos de planes y programas por parte del gabinete económico –hubo como siete en menos de año y medio– padecían todos el defecto de que debían dedicar una buena parte de sus reflexiones y propuestas a la situación coyuntural. Las condiciones de emergencia hicieron imposible pensar en el largo plazo, aparte de que distorsionaron todavía más los valores (y equilibrios) macroeconómicos.

Uno de los problemas subyacentes en las discusiones en torno a los planes económicos a largo plazo radicaba sin duda en la resistencia de Caldera a

aplicar las políticas de ajuste, hecha explícita y asumida como compromiso durante el proceso electoral. Pero una vez concretadas las medidas de junio de 1994, el margen de selección e ***imaginación se*** redujo bastante. Ya señalé que ellas pertenecían al modelo desarrollista en crisis –y agotado– mas no marcaban para nada la posibilidad de un modelo nuevo. De allí que todos los planes, al tener que tomar en cuenta esta amarga realidad, sufrieran de un defecto inicial insuperable, amén de que ninguno lograba imprimirle a la economía un nuevo dinamismo o un novedoso estilo ni mucho menos crear la confianza para poder captar el país los ahorros interno y externo para la inversión productiva. El resultado fue un prolongado periodo de indecisión, con su secuela de cuasi parálisis de la economía.

En estas circunstancias, una larga veintena de meses (entre junio de 1994 y abril de 1996) estuvo impregnada por dos hechos, a la postre fundamentales para el desempeño del gobierno de Caldera y el futuro de la economía venezolana. El primero fue el paulatino acercamiento de los responsables de las políticas económicas (y de algunos intelectuales en su función de asesores del gabinete) a las políticas del Consenso de Washington, negociaciones sucesivas con el FMI y el Banco Mundial incluidas. El segundo hecho se refirió al aumento de la importancia, una vez más, del petróleo para la economía del país, Los que manejan dicha industria supieron ganar al sector político, hasta el gobierno, y buena parte de la opinión pública para adelantar planes de «internacionalización» a través de « alianzas estratégicas» con empresas extranjeras, incluso aquellas que habían sido las concesionarias antes de la nacionalización en 1976, y devolverle así al «oro negro» un significado de la mayor importancia[13].

Tanto portavoces del gobierno como algunos analistas tienen razón: las políticas de ajuste no implican de por sí la imposición de un modelo neoliberal de funcionamiento de economía, sociedad y cultura. Es posible que sean transitorias, tal y como lo parece insinuar la Agenda Venezuela II en sus grandes rasgos (al menos hasta donde han sido conocidos hasta la fecha). Pero también es cierto que dichas políticas han exigido enormes sacrificios a los sectores tradicionalmente más postergados de nuestra sociedad. Por ello, uno de los más grandes retos hacia el futuro cercano (independientemente del resultado de las próximas elecciones en diciembre de 1998) es lograr, entre todos los actores colectivos, los acuerdos necesarios para diseñar, concertar, realizar y monitorear un nuevo modelo de desarrollo, cuyo epicentro deberá ser una ***reforma social*** a fondo (con los dos ejes de educación y salud y la profundización de la reforma del Estado como corolario).

[13] Es necesario reconocer que dicha importancia no es un invento propagandístico de los ejecutivos de la industria y del gobierno: Venezuela será indudablemente uno de los pocos, países proveedores de energía (petróleo y otras fuentes) más destacado del mundo en los primeros decenios del próximo siglo.

Precisamente por ello debe destacarse que la economía no es simplemente una cuestión de técnicas y de técnicos. Porque el ***quid*** de tal modelo no es la construcción de su racionalidad tecno-económica sino su énfasis en el bienestar de los venezolanos y en una viabilidad que le otorgue a su ejecución y conducción una nueva hegemonía social.

La integración regional y la «globalización»

Ya en su primer gobierno (1969 a 1974), Rafael Caldera había demostrado una visión considerablemente más diferenciada de las relaciones internacionales del país (y de los países latinoamericanos en general) que la gran mayoría de los gobiernos y de los presidentes de la región. Cuando ellos veían (y ven) en las relaciones con Estados Unidos el núcleo de la problemática de la política exterior latinoamericana y caribeña, para Caldera estaba (y está) claro que era (y es) imprescindible hacer lo que alguna vez describimos como «la diversificación de la dependencia», esto es: promover una mayor integración económica mas también política y cultural de la región[14]. Valga acotar que dos indicios de semejante visión fueron, por un lado, la incorporación de Venezuela al Pacto Andino (1971), pese a fuertes y prolongadas resistencias del sector privado (o «burguesía local»), y, por el otro, el encuentro con el presidente Garrastazú Medici (jefe de turno de la Junta Militar brasileña) en 1972 para discutir la posibilidad de un mayor acercamiento entre los dos países.

Al inicio de su segundo gobierno, Caldera buscó afanosamente el acercamiento con Brasil[15]. El acercamiento y la posible integración de Brasil y Venezuela, en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre Mercosur y Comunidad Andina, es de fundamental importancia estratégica para el futuro de toda la región, posiblemente de todo el sur del sistema mundial. Cualesquiera que sean los gobiernos que les sigan a los de Cardoso y Caldera (y más allá de la

[14] A finales de los años 60 y comienzos de los 70, le ayudaron a Caldera en el mantenimiento de semejantes posiciones sin duda tres hechos. Por un lado, nunca permitió que surgiera incertidumbre alguna en torno a que Venezuela fuera un abastecedor segurísimo de petróleo para EEUU en cualquier circunstancia. Porelotro, dada la condición incuestionablemente socialcristiana de Caldera, nadie podía sospechar que su búsqueda de la «diversificación de la dependencia», implicara algo así como un acercamiento a la Unión Soviética o el «comunismo internacional». Tercero, ese momento coincidió con el inicio del declive de la hegemonía económica (que no política y militar) de EEUU en el sistema mundial. Hoy día, la postura de Caldera en cuestiones de «globalización» e internacional parece estar libre de toda sospecha, al menos mientras que EEUU mantenga una posición de relativa «tolerancia», v. gr. pasividad, frente a América Latina y el Caribe (salvo en lo que se refiere al narcotráfico y al terrorismo, se entiende).

[15] A poco más de un mes de su periodo constitucional, recibió al presidente llamar Franco para una visita de trabajo; en septiembre de 1994 asistió a las festividades de la independencia del vecino en Brasilia; el presidente Fernando Henrique Cardoso visitó Venezuela en la celebración de la independencia (5 de julio de 1995); la visita de Estado de Caldera en mayo de 1996 fue significativa en sus resultados y en su atmósfera; en abril de 1997 Cardoso y Caldera se encontraron en Manaos y Boa Vista para sentar las bases de una mayor integración de las zonas fronterizas; Caldera se hizo representar en julio de 1997 en un encuentro interamericano de políticos e intelectuales en Brasilia por uno de sus más estrechos colaboradores; etc.

coincidencia de sus criterios y de su «química» personal), este acercamiento debería llegar a ser política de Estado en ambos países, so peligro de que prevalezca para toda la región el proyecto estratégico de EEUU.

El presidente Caldera ha dado impulsos igualmente significativos a las relaciones con Colombia (pese a las enormes dificultades que la situación interna de ese país abría y que los más de 2.000 km de frontera compartida aumentan), con los demás países miembros de la Comunidad Andina (cosechando los frutos de la política regional del presidente Carlos Andrés Pérez), con México, etc.

Pienso que se trata, en este particular, de ubicar a la región y al país en el proceso de «globalización». Este último puede ser asumido como un « destino inevitable» o como un acontecimiento a mediano y largo plazo que está lleno de contradicciones e hibrido por definición. Si lo segundo fuera cierto la integración sería un contrapeso contra las hegemonías, tal vez –¿quién sabe?– hasta un sendero por el cual pudiera afianzarse una modernización propia de la región y la cultura latinoamericanas. ¿No decía Huntington que la civilización latinoamericana era una de las siete que sobrevivirían?

El futuro

Los tiempos de transformaciones y cambios que ha vivido Venezuela durante las dos últimas décadas configuran tendencias de larga duración que pueden cristalizarse en imágenes de futuro. Con ellas se han tropezado los analistas, incluso el Grupo de Estudios de la Coyuntura Sociopolítica del CENDES, cada vez que han intentado hacer alguna predicción sobre las posibles trayectorias del futuro. El período constitucional de Caldera, el lapso de los dos años anteriores y probablemente el resto de su presidencia y los años siguientes han estado y están impregnados por tales imágenes, incluso como representaciones colectivas movilizadoras de grupos, sectores y clases sociales. Me limito a presentar las cinco que aparecen como reiterativas en los estudios: a) la continuación de las tendencias de los últimos tiempos; b) el éxito de la nueva forma de hacer política, a través de la negociación de acuerdos y la búsqueda de soluciones que permitan la confluencia de intereses en principio divergentes; c) la imposición de un amplio y profundo proceso de «revolución» cultural, con la inclusión e integración de los hoy excluidos; d) un autoritarismo de derechas ejecutado por oficiales de alta graduación; y e) un autoritarismo de izquierdas ejecutado por oficiales de graduación mediana.

Estoy profundamente y por principio en contra de las dos últimas imágenes de futuro (si es que realmente se trata de dos diferentes). Serían las respuestas, ya sean profilácticas o posteriores, frente a un(os) estallido(s) del país. Con ello y todo, a estas alturas del proceso histórico, los autoritarismos son atávicos y obsoletos, no se corresponden con estructuras y tejidos sociales, uno de cuyos principios de funcionamiento es la responsabilidad individual (la ciudadanía de

veras), implican des-identificaciones y por ende la pérdida de la cordura como virtud social. Pero no desaparecen por obra y gracia de la extensión de la democracia por todo el continente. Para conjurar el peligro de un nuevo surgimiento de los autoritarismos es indispensable mantenerse en alerta y estar dispuesto a luchar activamente contra ellos[16].

La primera imagen es la que, a mi juicio, tiene el grado más elevado de probabilidad de ocurrir. La transición inconclusa que estamos viviendo en estos largos meses finales de la presidencia de Caldera, hará que las mismas fuerzas y las mismas organizaciones (corporativas y políticas) de la Venezuela postpetrolera sigan siendo hegemónicas durante algún decenio más. A lo mejor aprenden a renovarse y aceptan los retos de una mayor cercanía a los ciudadanos. así como de revitalización de sus liderazgos. Pero, por otro lado, es evidente que la realización de esta imagen implica también el mayor peligro del estallido. No sería la primera vez en la historia que la apatía se convirtiera en furia colectiva y por ende en elemento catalizador de cambios profundos.

Las imágenes de una «revolución» cultural y la victoria de una nueva forma de hacer política deberían amalgamarse. Entonces estaríamos en el camino hacia un futuro como sociedad, cohesionada, solidaria, con posibilidades de combatir las desigualdades e inequidades, con la oportunidad de integrarnos todos. Pero es altamente probable que la realización de esa amalgama necesitará todavía un lapso mayor que los dos próximos periodos constitucionales, lo cual no es obstáculo para que las elites económicas, sociales, políticas y sobre todo cultural-ideológicas preparen las diferentes vías que hacen factibles estas dos imágenes.

Estamos, dentro de unos cuantos meses, llegando al final de esta fase de transición encarnada en la presidencia de Caldera. Ciertamente hubo varias otras trayectorias posibles de la misma. Pero fue la que se escogió, por decisión y omisión, para bien o para mal. Nosotros mismos y los que nos sigan tendrán que ir más lejos, sobre todo en el esfuerzo por construir la viabilidad de una trayectoria que permita reconciliar finalmente el desarrollo y la democracia, esto es: el bienestar material y la participación ciudadana. Porque me resisto a creer en que democracia política e igualdad y equidad económico-sociales sean incompatibles.

Caracas, agosto de 1997

[16] En este sentido, soy más realista (¿o pesimista?) que muchos otros analistas, políticos profesionales incluidos.